



POR UN 1º DE MAYO REIVINDICATIVO Y DE LUCHA:

POR LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE SALARIOS Y PENSIONES CON EL IPC REAL Y LA ACTUALIZACIÓN DEL INDICADOR DE RENTA DE SUFICIENCIA DE CATALUÑA (IRSC)

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

NO AL AUMENTO DEL GASTO MILITAR Y LA GUERRA

El coste de la vida o IPC real que en 2020 se incrementó un 0,4%, en 2021 dio un salto hasta alcanzar el 6,5%, durante los tres primeros meses de 2022 se ha incrementado un 3,9%. Si se tiene en cuenta el IPC interanual (de marzo de 2021 a marzo 2022) el incremento es del 9,8%. Las previsiones anuncian un notable incremento del coste de la vida a lo largo de 2022. Las consecuencias de este brutal incremento del coste de la vida las pagan la clase trabajadora y las clases populares con un importante deterioro de sus condiciones de vida.

La lucha por recuperar el poder adquisitivo de los salarios, pensiones y prestaciones con la aplicación del IPC real es una tarea fundamental en los próximos tiempos y hace necesaria mas que nunca la unidad de acción de la clase trabajadora, de sus organizaciones y movimientos sociales. Ante las maniobras del gobierno de España junto a la patronal para imponer el llamado “Pacto de rentas” cuyo objetivo es recortar el poder adquisitivo de los salarios, con incrementos inferiores al IPC Real, o utilizando fórmulas tramposas como el IPC subyacente y el promedio, notablemente inferiores al IPC real como han sufrido los pensionistas en la última revalorización.

Hemos de movilizarnos contra las causas de la espiral inflacionista resultado de las políticas económicas de los gobiernos de Europa durante la pandemia, y en especial de un sistema de cálculo de precios de la energía injusto que beneficia a las oligarquías del sector energético. Mas que nunca hemos de reivindicar que el sector energético en España, dado su carácter estratégico, no puede seguir en manos privadas y debe volver a ser de propiedad pública, así como desvincularse definitivamente del sistema de cálculo actual de la Unión Europea.

El incremento de la inflación se ha visto agravada por las consecuencias de la guerra económica promovida por la OTAN y EEUU contra Rusia ante la invasión de Ucrania. Esa guerra económica impuesta por instituciones militares no democráticas tiene un efecto “boomerang” contra las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras y de la mayoría social en los países de Europa y en España, especialmente de los sectores más vulnerables. Al notable incremento del gasto militar en los presupuestos de España en 2022, habrá que sumar si no lo impedimos, alrededor de 15.000 millones de euros más al año para alcanzar el 2% del PIB, objetivo anunciado por el presidente de gobierno Pedro Sanchez.

Ante una perspectiva económica inflacionista, de recortes en la producción como consecuencia de la guerra económica, que se verán agravadas por las futuras medidas de ajuste y austeridad del BCE y la Comisión Europea, el aumento del gasto militar acentuará la profundidad de los recortes sociales, abocando a una grave recesión económica, el aumento del desempleo y la pobreza. La defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos hace necesario movilizarse contra el aumento del gasto militar y contra las medidas de la economía de guerra.

La exclusión social en Cataluña, según el último informe Foessa de Cáritas, golpea el 29,1 % de la población en Cataluña. La tasa de pobreza severa según el informe de IDESCAT en 2020 era el 6,2%, es decir 475.000 personas, y la previsión para 2021 y 2022 es de un notable incremento. Hasta la fecha la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía solo da cobertura al 36% de la población con pobreza severa, lo que demuestra las graves restricciones e incumplimientos de dicha ley por el gobierno de la Generalitat.

Además, la prestación de la Renta Garantiza de Ciudadanía (RGC) ha perdido más del 12% de su poder adquisitivo desde el 15 de septiembre de 2017 hasta la fecha al estar congelado el IRSC. Y lo que es más

grave, dicho indicador que sirve para calcular las cuantías y el acceso a las prestaciones como la RGC sigue congelado, incumpliendo la legislación, desde el 1 de enero de 2010 hasta marzo 2022 habiendo perdido un 27,1 % de su valor. Por consiguiente, es urgente defender los derechos de las personas más vulnerables exigiendo al gobierno de la Generalitat la actualización del Indicador de Renta de suficiencia de Cataluña con el IPC acumulado en Cataluña en dicho periodo.

En este 1º de mayo, en un contexto determinado por el brutal incremento del coste de la vida y las consecuencias antisociales de la guerra económica, salimos a la calle para reivindicar:

- 1.- El incremento de salarios y pensiones con el IPC real. No al “pacto de rentas” explícito o de “facto”.
- 2.- Actualización inmediata del Indicador de Renta de suficiencia de Cataluña con el IPC acumulado durante todo el tiempo que ha estado congelado. Por una implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía sin trampas ni restricciones. En defensa de los derechos de la población vulnerable.
- 3.- Por el pleno empleo digno y estable: Por la reducción de la semana laboral a 30 horas sin reducción del salario, por la plena derogación de la reforma laboral de 2012 y de toda la legislación laboral que ha recortado derechos laborales y fomentado la precariedad laboral.
- 4.- Por unas pensiones públicas dignas, no a la privatización de las pensiones. Por la recuperación de la edad de jubilación a los 65 años.
- 5.- Por la nacionalización del sector energético y asegurar un precio justo y accesible. Por el derecho a los suministros básicos de energía y agua no determinados por la especulación y el abuso, especialmente a las familias y personas vulnerables.
- 6.- Por una ley que garantice el derecho a la vivienda, recogiendo las enmiendas presentadas por la iniciativa estatal de los movimientos sociales a la ley de la vivienda.
- 7.- En defensa del carácter público de la Sanidad, por revertir las privatizaciones y externalizaciones, y asegurar una salud Universal, solidaria, integral y de calidad.
- 8.- En defensa de una Educación pública y de calidad, revertir las privatizaciones, y asegurar el carácter estable y digno de las plantillas en los centros escolares y de la Universidad. No al abuso de la interinidad. Asegurar una plaza pública y gratuita a toda la infancia de 0 a 3 años. Avanzar hacia la Plena gratuidad de las universidades públicas y en la formación profesional.
- 9.- Residencias de carácter público y de calidad para las personas mayores y con diversidad funcional. Revertir la privatización de centros de titularidad pública. Modificación de la cartera de servicios de 2020. Ratio mínima de un puesto de gericultor por cada cuatro personas en los turnos de mañana y tarde, y uno por cada diez en el turno de noche. Servicio médico y de enfermería las 24 horas. Atención médica a cargo de la sanidad pública. Contratación estable y digna del personal de residencias. Por un nuevo modelo de más calidad.
- 10.- Por una atención domiciliar de carácter público y de calidad, en condiciones dignas para trabajadoras/es y usuarios/as.
- 11.- Papeles para todas las personas inmigrantes, que permita su acceso a un empleo estable y digno Cierre de los centros de internamiento para extranjeros (CIEs).
- 12.- No al incremento del gasto militar, por su reducción, no a la guerra económica.

En defensa de las reivindicaciones participemos en la manifestación del 1º de mayo, a las 18 horas, en el parque de las 3 Chimeneas, metro líneas 2 y 3 Paralelo.

25 abril 2022

ALIANZA DE MAREAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Email: alianza.mms@gmail.com